Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **00403/INFOEM/IP/RR/2024**,promovido por **XXX XXX,** a quien en lo sucesivo se le identificará como **el RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Villa de Allende,** en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

1. El día **once de enero de dos mil veinticuatro,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía SAIMEX, la solicitud de información pública registrada con el número **00002/VIALLEN/IP/2024;** mediante la cual se solicitó la siguiente información:

*“Solicito información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, con todas las características que debe contener. Los resultados de la evaluación realizada a los programas programaticos o proyectos con recursos 2021, 2022 y 2023.Aviso de privacidad respecto al uso de imágenes en informes de gobierno, informe del director de policía a partir de su ingres que a realizado para bajar el índice delictivo en el municipio. Cuantas demandas penales tienen los servidores públicos del ayuntamiento, nombre del imputado y estado procesal..”*

1. El **veintinueve de enero de dos mil veinticuatro** el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información, mediante un archivo electrónico en formato pdf, cuyo contenido grosso modo es el siguiente:

***INFORME DEL Director de Seguridad.pdf:*** *oficio del Director de Seguridad Municipal, mediante el cual informa que respecto de los programas de subsidio, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, informa que al Ayuntamiento le fueron otorgados los recursos del FAP, FOFISP y FORTAMU.*

*Respecto de los resultados de la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos con recursos 2021, 2022 y 2023 hace un resumen sobre en que fueron utilizados los recursos FASP y FOFISP, así como el FORTAMUN, respecto del aviso de privacidad informa que no forma parte de su competencia.*

*En cuanto al informe del Director de Seguridad sobre que ha realizado para bajar el índice delictivo en el municipio desde su ingreso informa que ha implementado acciones estratégicas de disuasión y vigilancia en las 67 comunidades y su cabecera municipal, refiere que han realizado acciones en materia de prevención y que ha funcionado el sistema de video vigilancia a través del Centro de Mando Municipal C2.*

*Por ultimo en cuanto a las demandas penales refiere que no forma parte de su competencia.*

1. Inconforme con la respuesta, el **treinta de enero de dos mil veinticuatro,** la entonces solicitante interpuso el recurso de revisión de mérito, manifestando las siguientes razones o motivos de inconformidad:

* **Acto impugnado:** *“no entregaron la totalidad de la informacion solicitada.*”
* **Razones o Motivos de inconformidad:** *“no entregaron la totalidad de la informacion solicitada.”*

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de fecha **siete de febrero de dos mil veinticuatro**, se puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, y el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
2. De lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** el **doce de febrero, seis de marzo y quince de marzo de dos mil veinticuatro** entrego cuatro archivos electrónicos en formato, cuyo contenido grosso modo es el siguiente.

***aviso de privacidad.pdf:*** *aviso de privacidad aplicable para las páginas de redes* ***sociales y las página web oficial del Ayuntamiento de Villa de Allende.***

***INFORME DEL DIR SEG PUB.pdf:*** *oficio del Director de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual ratifica su respuesta inicial.*

***PROGRAMAS DE SUBSIDIOS ESTIMULOS Y APOYOS TESORERIA.pdf:*** *oficio del Tesorero Municipal, mediante el cual informa sobre los programas, apoyos y estímulos que fueron autorizados para el año dos mil veinticuatro, sin mencionar sus características.*

***DEMANDAS PENALES.pdf:*** *oficio del Asesor Jurídico, mediante el cual informa que dentro de las atribuciones de la Dirección o de los servidores Públicos del Ayuntamiento de Allende no está el tramitar demandas penales.*

1. Por su parte el **RECURRENTE el seis de marzo de dos mil veinticuatro** ENTREGO el archivo electrónico ***PROGRAMAS DE SUBSIDIOS ESTIMULOS Y APOYOS TESORERIA.pdf,*** que contiene la respuesta del Tesorero Municipal.
2. El **catorce de marzo de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente notificó el acuerdo de ampliación para emitir resolución.
3. Este organismo garante no pasa por alto explicar que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra su justificación en que, el alto número de recursos de revisión recibidos ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la elaboración de resoluciones a dichos medios de impugnación.
4. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
5. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
6. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
7. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Seguidamente el día **diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro**, se decretó el cierre de instrucción, por lo que no habiendo más que hacer constar, y ------------------------

**CONSIDERANDO**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO.** **De la oportunidad y procedencia.**

1. Los medios de impugnación fueron presentados a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó sus respuestas el **veintinueve de enero de dos mil veinticuatro**, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del día del **treinta de enero al veinte de febrero de dos mil veinticuatro**; en consecuencia, el ahora **RECURRENTE** presentó sus inconformidades **treinta de enero de dos mil veinticuatro**; es decir dentro del lapso legalmente establecido para tal efecto.
2. Asimismo, los escritos contienen las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. De las constancias en el expediente al rubro indicado, se desprende que la particular solicitó la información que a continuación se desagrega:

***Solicito información del Ayuntamiento de Villa de Allende, consistente en o siguiente:***

* ***De los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, las características que debe contener;***
* ***Los resultados de la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos con recursos 2021, 2022 y 2023;***
* ***Aviso de privacidad respecto al uso de imágenes en informes de gobierno;***
* ***Informe del Director de Seguridad Municipal para bajar el índice delictivo en el municipio, desde su ingreso; y***
* ***Cuántas demandas penales tienen los servidores públicos del Ayuntamiento, nombre del imputado y estado procesal.***

1. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** remitió un archivo electrónico en formato pdf, que consiste en la respuesta del Director de Seguridad Municipal, mediante la cual informa *Director de Seguridad Municipal, mediante el cual informa que respecto de los programas de subsidio, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, informa que al Ayuntamiento le fueron otorgados los recursos del FAP, FOFISP y FORTAMUN, respecto de los resultados de la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos con recursos 2021, 2022 y 2023 hace un resumen sobre en que fueron utilizados los recursos FASP y FOFISP, así como el FORTAMUN, respecto del aviso de privacidad informa que no forma parte de su competencia en cuanto al informe del Director de Seguridad sobre que ha realizado para bajar el índice delictivo en el municipio desde su ingreso informa que ha implementado acciones estratégicas de disuasión y vigilancia en las 67 comunidades y su cabecera municipal, refiere que han realizado acciones en materia de prevención y que ha funcionado el sistema de video vigilancia a través del Centro de Mando Municipal C2, por último en cuanto a las demandas penales refiere que no forma parte de su competencia.*
2. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 179, **fracción V** de la Ley **de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y Municipios**; fracción que determina la hipótesis jurídica relativa a la entrega de información incompleta; contexto del cual se dolió **EL RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad.
3. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el **SUJETO OBLIGADO** con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaantes señalada; asimismo, determinar si se vulnera el derecho de acceso a la información del particular por la inobservancia a los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señala entre otros, que en la generación y entrega de información se deberá garantizar que sea oportuna, expedita, completa e integral.

**CUARTO. Del estudio y resolución del estudio.**

1. **Del derecho de acceso a la información.**
2. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México.
3. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. En México, además de los derechos, están reconocidas las garantías para su protección, en ese sentido el párrafo tercero de artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

*“****Artículo 1.-***

*(…)*

*Todas las* *autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*(…)*”.

1. Por lo anterior, se deduce que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano de Fuente Internacional y Constitucionalmente reconocido. Además del derecho, también se reconocen garantías para su protección, lo que vincula con el mandato del párrafo tercero del mismo artículo.
2. Así, conforme a la Constitución Política de las Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México respectivamente, el cumplimiento de las garantías primarias, entendidas como obligaciones inmediatamente relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información Pública, permiten que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones lo respeten, protejan y garanticen.

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

1. Según el artículo 150 de la Ley de Transparencia del Estado, la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
2. El Derecho de Acceso a la Información se garantiza y respeta oportunamente, y según lo que dispone la Ley, las *solicitudes de acceso a la información*.
3. Así entonces, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada.

**II. De la información solicitada y la respuesta del SUJETO OBLIGADO**

1. De lo anterior, se debe de establecer la información solicitada por el **RECURRENTE y la información entregada por el SUJETO OBLIGADO** para establecer si se colma del derecho de acceso a la información del **RECURRENTE,** de acuerdo con la siguiente tabla de analisis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Información Solicitada* | *Respuesta* | *Informe Justificado* | *Colma* |
| ***De los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, las características que debe contener*** | *Oficio del Director de Seguridad Municipal, mediante el cual informa que respecto de los programas de subsidio, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, informa que al Ayuntamiento le fueron otorgados los recursos del FAP, FOFISP y FORTAMUN.* | *oficio del Tesorero Municipal, mediante el cual informa a la fecha de la solicitud la Tesorería Municipal a través de Catastro Municipal para el ejercicio fiscal 2024 realiza bonificaciones en el pago del impuesto predial por pago anticipado y pago puntual, así como a grupos vulnerables, en el mismo refiere que Catastro Municipal en colaboración con el IMEVIS se cuenta con tarifas preferenciales de hasta 50% como estímulo fiscal al pago del impuesto predial 2024 y años anteriores, multas, recargos y demás accesorios, así como del Impuesto del Traslado de Dominio, Constancia de Certificación de Clave y Valor Catastral, Constancia de No Afectación a Dominio Público y Plano Manzanero a favor de los contribuyentes.* | *No colma, toda vez que solo se dan a conocer los programas y de acuerdo con la Ley Local de la Materia la información de programas, subsidios y apoyos forma parte de las obligaciones de transparencia común, en el cual establece que es lo que deben de contener, (tomándolo como sus características).*  *Además de que en la respuestas, solo se pronuncia la Dirección de Seguridad Municipal y la Tesorería Municipal, faltando el resto de las Direcciones que integran al Ayuntamiento de Villa de Allende* |
| ***Los resultados de la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos con recursos 2021, 2022 y 2023.*** | *El Director de Seguridad Municipal hace un resumen sobre en que fueron utilizados los recursos FASP y FOFISP, así como el FORTAMUN* | *El Tesorero Municipal anexa la liga* [*https://www.osfem.gob.mx/informederesultados/*](https://www.osfem.gob.mx/informederesultados/)*, de la cual refiere que se puede consultar la información solicitada.* | *No colma, toda vez que la liga electrónica se encuentra en formato cerrado, esto quiere decir que el* ***RECURRENTE*** *tiene que**hacer la transcripción directa, además de realizar una búsqueda global.*  *Situación por la cual se debe de referir que la información solicitada se puede encontrar en Programa Anual de Evaluación.* |
| ***Aviso de privacidad respecto al uso de imágenes en informes de gobierno*** | *El Director de Seguridad Municipal, informa que este punto no forma parte de sus competencia* | *Se anexa el Aviso de Privacidad de las páginas de redes sociales y la Página web oficial del Ayuntamiento de Villa de Allende.* | *No colma, toda vez que el aviso de privacidad no versa en cuanto al uso de las fotografías utilizadas en los informes de gobierno.* |
| ***Informe del Director de Seguridad Municipal para bajar el índice delictivo en el municipio, desde su ingreso*** | *Informe del Director de Seguridad sobre que ha realizado para bajar el índice delictivo en el municipio desde su ingreso informa que ha implementado acciones estratégicas de disuasión y vigilancia en las 67 comunidades y su cabecera municipal, refiere que han realizado acciones en materia de prevención y que ha funcionado el sistema de video vigilancia a través del Centro de Mando Municipal C2.* | *Informe del Director de Seguridad sobre que ha realizado para bajar el índice delictivo en el municipio desde su ingreso informa que ha implementado acciones estratégicas de disuasión y vigilancia en las 67 comunidades y su cabecera municipal, refiere que han realizado acciones en materia de prevención y que ha funcionado el sistema de video vigilancia a través del Centro de Mando Municipal C2.* | *Si colma* |
| ***Cuántas demandas penales tienen los servidores públicos del Ayuntamiento, nombre del imputado y estado procesal.*** | *El Director de Seguridad Municipal refiere que no forma parte de su competencia.* | *Respuesta del Asesor Jurídico, mediante el cual informa que lo solicitado no corresponde a las atribuciones conferidas a las dependencias o servidores públicos municipales.* | *No colma* |

1. De lo anterior, se puede observar que de la totalidad de la solicitud de información quedo colmado un punto, siendo el siguiente.
2. En cuanto a “***Informe del Director de Seguridad Municipal para bajar el índice delictivo en el municipio, desde su ingreso***” se observa que de acuerdo con el Artículo 39 del Bando Municipal del Ayuntamiento de Villa de Allende, se integra por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien de acuerdo con el artículo 105 del citado Bando Municipal, tiene las siguientes funciones.

***Artículo 105.*** *Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de su personal operativo:*

1. *Prevenir la comisión de infracciones, preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de las personas en el marco de respeto de los Derechos Humanos.*

*II. Detener, trasladar y custodiar al infractor al lugar destinado al cumplimiento de la infracción administrativa.*

*III. Presentar ante el Juzgado Cívico al presunto infractor, en términos del Reglamento de Justicia Cívica, garantizado el respeto a los derechos humanos.*

*IV. Hacer de conocimiento a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos al momento de una detención para verificar que se respeten los derechos humanos de los detenidos.*

*V. Registrar las detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por personal policial.*

*VI. Supervisar y evaluar el desempeño del personal operativo en la aplicación del presente Bando Municipal, considerando el intercambio de información con las autoridades correspondientes.*

*VII. Auxiliar a la o el Juez Cívico en el ejercicio de sus funciones.*

*VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad Pública, el Reglamento de Justicia Cívica de Villa de Allende y el Bando Municipal.*

***IX. Ejecutar los programas y llevar a cabo las acciones que se hayan diseñado para garantizar la seguridad pública, la prevención de los delitos y faltas administrativas en el Municipio.***

*X. Es obligación de los elementos que integran el cuerpo de seguridad pública municipal conocer el contenido del presente Bando, para su aplicación, difusión, estricta observancia y debido cumplimiento.*

*XI. Realizar periódicamente los Consejos de seguridad Pública Municipal y dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada sesión.*

*XII. Las demás que le confiera este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.*

1. De lo anterior, se observa que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tiene dentro de sus funciones ejecutar los programas que lleven a cabo las acciones para garantizar la seguridad pública para la prevención de delitos, situación por la cual se colige que al solicitar el informe de actividades que de cuenta de las actividades que se han realizado para bajar el índice delictivo, si quedo colmado, toda vez que la información es entregada por el servidor público habilitado.
2. Ahora bien, respecto del punto consistente en “***Cuántas demandas penales tienen los servidores públicos del Ayuntamiento, nombre del imputado y estado procesal.”,*** se debe de establecer que en respuesta el **Asesor Jurídico**, informa que lo solicitado no forma parte de las atribuciones de las Direcciones y de los Servidores Públicos que conforman la administración pública del Ayuntamiento de Villa de Allende.
3. De lo anterior, se debe de precisar que no se observa que el Asesor Jurídica, sea el área habilitada del **SUJETO OBLIGADO** para conocer sobre “las **demandas penales”** que pudieran tener los servidores públicos.
4. Ahora bien de lo anterior, se debe de precisar que los solicitantes no son expertos en conocer los términos exactos para solicitar la información, situación por la cual en el presente recurso de revisión se debe de realizar la suplencencia de lo solicitado, toda vez que se entiende que el **RECURRENTE** desea conocer sobre las denuncias que tiene el **SUJETO OBLIGADO** en relación con los servidores públicos.
5. En ese sentido, de acuerdo con la Real Academia Española, la palabra denuncia deviene de la acción de **notificar a las autoridades** competentes un hecho **delictivo** o **irregular para que se investigue y se tomen las medidas correspondientes,** siendo estos hechos delictivos de ubicación dentro de la rama del derecho público en el derecho penal.
6. Una vez precisado lo anterior, de conformidad con el artículo 211 del Bando Municipal de Villa de Allende, se observa que el área habilitada de manera enunciativa más no limitativa podría ser la Sindicatura Municipal, de conformidad con lo siguiente.

***Artículo 211.*** *Corresponde a la* ***Síndica o Síndico Municipal******procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales****; al Presidente Municipal* ***representar jurídicamente al Ayuntamiento****, a los integrantes de los mismos y a las dependencias de la Administración Pública Municipal* ***en los litigios en los que éstos fueren parte****; así como la gestión de los negocios de la hacienda municipal, facultándolos para otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación jurídica correspondiente, pudiendo convenir en los mismos.*

*Cuando se trate de la representación legal de los miembros de los Ayuntamientos, esta sólo se dará en asuntos de índole oficial y que atañan a sus funciones públicas y al ejercicio de sus atribuciones.*

1. Del artículo anterior, se observa que el Síndico o Sindica Municipal es el servidor público habilitado que pudiera tener información acerca de las denuncias, toda vez que es quien funge como representante jurídico del Ayuntamiento de Villa de Allende, de los procedimientos en los que forme parte.
2. De lo anterior, se debe de mencionar que de manera enunciativa más no limitativa la **interposición de una denuncia** en contra de **servidores públicos**, puede **derivar de un mal uso del poder o cargo público conferido, lo cual se relaciona con la comisión u omisión a infracciones o faltas administrativas consideradas graves.**
3. Ahora bien, como ya quedo precisado en línea anteriores, el área de la Sindicatura Municipal es el área responsable de representar al Ayuntamiento de Villa de Allende, en los procedimientos jurídicos, situación de los cuales se derivan los penales, por lo que hace el siguiente análisis de acuerdo al procedimiento penal por las posibles denuncias interpuestas por el **SUJETO OBLIGADO** en las que pudieran tener participación los servidores públicos.
4. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal ordinario comprenderá las siguientes fases:

*“****I.*** *La de investigación, que comprende las siguientes fases:*

***a)*** *Investigación inicial, que* ***comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente*** *y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e*

***b)*** *Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;*

***II.*** *La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y*

***III.*** *La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.”*

(Énfasis añadido)

1. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.
2. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.
3. **Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de** querella o de **cualquier** otro **requisito** equivalente **que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda**. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten[[5]](#footnote-5).
4. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales[[6]](#footnote-6). Por otro lado, si la denuncia se presenta ante la Policía, ésta informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público[[7]](#footnote-7).
5. Por otro lado, existen dos formas de iniciar la investigación: de oficio y por querella. La primera, implica que el Ministerio Público inicie inmediatamente la investigación derivado de la *notitia criminis* en razón de su impacto y tipicidad; esto usualmente con la comisión de delitos graves.
6. Por su parte, la **querella** es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente[[8]](#footnote-8)
7. Ahora bien, la **cadena de custodia** es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión[[9]](#footnote-9).
8. Existirán tres formas de terminación de la investigación ajenos al ejercicio de la acción penal, a saber:
   1. *Facultad del Ministerio Público de abstenerse a investigar[[10]](#footnote-10): Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.*
   2. *Archivo temporal[[11]](#footnote-11). El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.*
   3. *No ejercicio de la acción penal[[12]](#footnote-12): Previo a la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.*
9. Por cuanto hace a los datos de prueba, cualquier hecho podrá ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica[[13]](#footnote-13).
10. Ahora bien, para la **audiencia inicial** del procedimiento penal, se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la **imputación**, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación[[14]](#footnote-14).
11. A fin de formular la imputación conforme a derecho, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley[[15]](#footnote-15).
12. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso[[16]](#footnote-16).
13. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que[[17]](#footnote-17):
    1. *Se haya formulado la imputación;*
    2. *Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;*
    3. *De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y*
    4. *Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.*
14. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento[[18]](#footnote-18). Antes de finalizar la audiencia inicial, el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria[[19]](#footnote-19).
15. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá[[20]](#footnote-20):
    1. *Solicitar el sobreseimiento parcial o total;*
    2. *Solicitar la suspensión del proceso, o*
    3. *Formular acusación.*
16. La formal acusación por parte del Ministerio Público, iniciará la etapa intermedia del proceso, el cual tendrá por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio[[21]](#footnote-21).
17. De conformidad con lo establecido por el numeral 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación deberá considerar los siguientes elementos:

*“****Artículo 335****. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa:*

***I.*** *La individualización del o los acusados y de su Defensor;*

***II.*** *La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico;*

***III.*** *La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;*

***IV.*** *La relación de las modalidades del delito que concurrieren;*

***V.*** *La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado;*

***VI.*** *La expresión de los preceptos legales aplicables;*

***VII.*** *El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;*

***VIII.*** *El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;*

***IX.*** *La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos;*

***X.*** *Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma;*

***XI.*** *La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;*

***XII.*** *La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y*

***XIII.*** *La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda.”*

1. Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. La Defensa podrá promover las excepciones que procedan[[22]](#footnote-22).
2. Posteriormente, y una vez establecidos los acuerdos probatorios, el Juez se cerciorará de que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente[[23]](#footnote-23).
3. Finalizada la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar[[24]](#footnote-24):
   1. *El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio;*
   2. *La individualización de los acusados;*
   3. *Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación;*
   4. *Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes;*
   5. *Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada;*
   6. *Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño;*
   7. *Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan;*
   8. *Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y*
   9. *Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.*
4. Finalmente, la etapa de **juicio** será el periodo de **decisión** de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad[[25]](#footnote-25).
5. Una vez recibido el auto de apertura a juicio oral, el Tribunal de enjuiciamiento deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia[[26]](#footnote-26).
6. En el día y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella[[27]](#footnote-27).
7. Abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido se concederá la palabra al Asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al Defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral[[28]](#footnote-28).
8. Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponderá recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa[[29]](#footnote-29).
9. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al Defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el Defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate[[30]](#footnote-30).
10. Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del Juez o miembro del Tribunal[[31]](#footnote-31).
11. Concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo[[32]](#footnote-32).
12. De acuerdo con lo establecido por el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fallo que emita el Tribunal de enjuiciamiento deberá señalar:
    1. *La decisión de absolución o de condena;*
    2. *Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y*
    3. *La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan*
13. Por cuanto hace a la redacción de las sentencias absolutorias y condenatorias, deberán atender lo establecido en los diversos 405 y 406 del Código Nacional Procesal de mérito, mismos que establecen lo siguiente:

*“****Artículo 405. Sentencia absolutoria***

*En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente.*

*En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:*

***I.*** *Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible;*

***II.*** *Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, o*

***III.*** *Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta. De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida.*

***Artículo 406. Sentencia condenatoria***

*La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.*

*La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.*

*La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.*

*El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.*

*Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.*

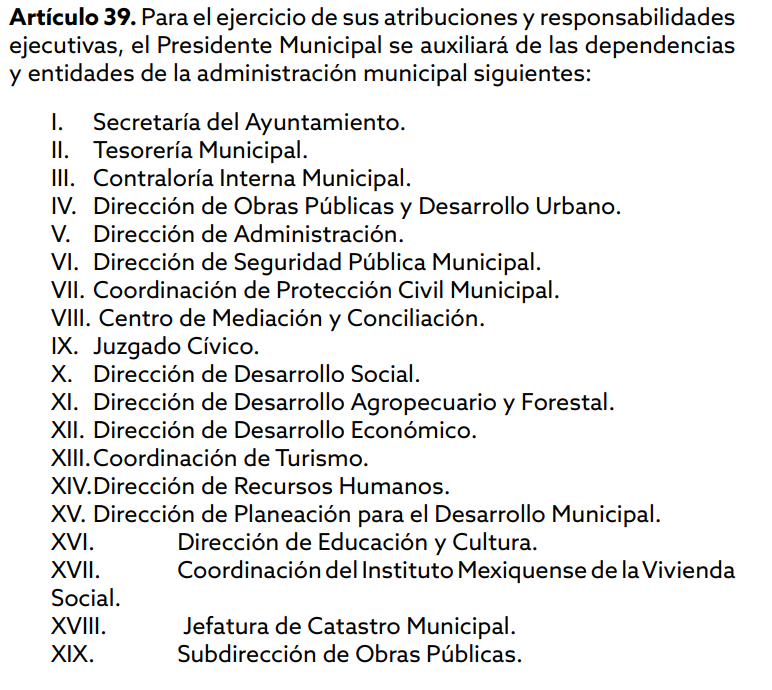
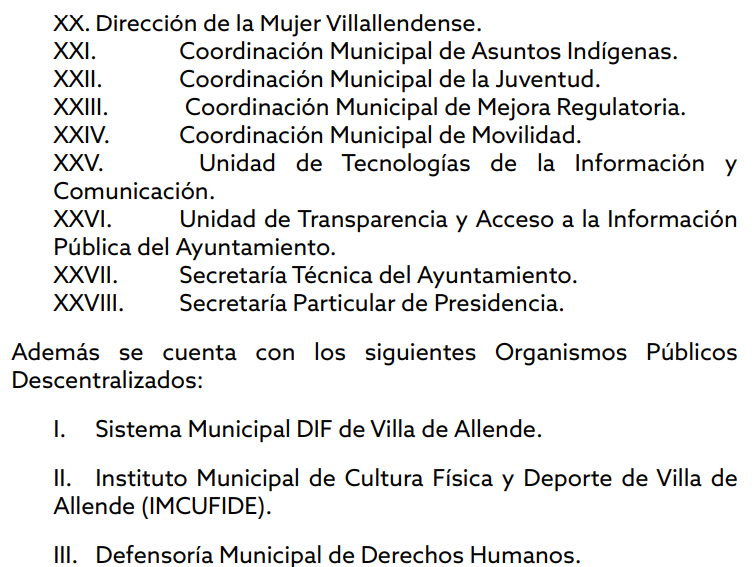
*El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.*

*Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.*

*La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.*

*En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.”*

1. Establecido lo anterior, el Código Penal del Estado de México reconoce y enlista, dentro de su Título Sexto, los **Delitos por Hechos de Corrupción** que cometan **los servidores públicos** o particulares que hagan un mal uso de sus facultades, potestades o atribuciones conferidas por el Estado.
2. Al respecto, cabe referir que será reconocido como *servidor público* a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos[[33]](#footnote-33).
3. Dicho lo anterior, los artículos del 331 al 353 tipifican y reconocen los **delitos por hechos de corrupción** que pueden cometer los servidores públicos del Estado de México, a saber:
   1. Incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas;
   2. Coalición;
   3. Abuso de autoridad;
   4. Uso ilícito de atribuciones y facultades;
   5. Concusión;
   6. Intimidación;
   7. Ejercicio abusivo de funciones;
   8. Tráfico de influencia;
   9. Cohecho;
   10. Peculado;
   11. Enriquecimiento ilícito; y
   12. Delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.
4. Como puede advertirse, los **delitos por hechos de corrupción** se relacionan de forma intrínseca con las **faltas administrativas graves** establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; por lo tanto, resultaría de interés público que se diera a conocer el nombre del o los servidores públicos quienes estuvieran involucrados en este tipo de delitos y el estado procesal en que se encuentran, ya que toda vez como se demostró en párrafos anterior el Ayuntamiento de Villa de Allende al existir la posibilidad de promover denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, forma parte del procedimiento penal llevado en forma juicio, situación por la cual se tiene la información sobre el nombre de los servidores públicos y el estado procesal que guarden los posibles expedientes.
5. Así las cosas, podemos concluir que si las denuncias fueron promovidas por el Ayuntamiento de Villa de Allende por medio del Sindicatura Municipal, o alguno de sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, el **SUJETO OBLIGADO** debe poseerla y administrarla en sus archivos la información solicitada por el **RECURRENTE.**
6. Por lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** deberá realizar una nueva búsqueda en sus archivos, donde no podrá omitir a la **Sindicatura Municipal**, a fin de entregar la información referente a **las denuncias interpuestas en contra de servidores públicos** en relación con los procedimientos penales
7. Dicho lo anterior, por cuanto hace a la información que deba entregarse en versión pública, el **SUJETO OBLIGADO** deberá atender las reflexiones expuestas en el Considerando **QUINTO** de la presente resolución.
8. Seguidamente se debe de mencionar que al dar a conocer el estatus de las denuncias y el nombre de los servidores públicos que tengan relación con procedimientos penales, se proporcionara el número de dichas denuncias, siendo esta la información estadística solicita por el **RECURRENTE.**
9. Por otro lado de ser el caso que del periodo del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro, no se hubiera generado, poseído o administrado información relacionada con denuncias, bastará con el **SUJETO OBLIGADO** lo haga del conocimiento del **RECURRENTE** de conformidad con el artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Local de la Materia.
10. En ese línea, por lo que respecta al punto de “***De los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, las características que debe contener*** “, se debe de referir que el **SUJETO OBLIGADO** solo refiere respuesta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Tesorería Municipal, sin embargo de las mismas no se observa que hubieran referido las características de las mismas.
11. En ese sentido es importante mencionar como primer punto que le Ayuntamiento de Villa de Allende de conformidad con el artículo 32 del Bando Municipal, se integra por las siguientes áreas.

1. En ese sentido, se demuestra que el Ayuntamiento de Villa de Allende se integra por 31 áreas, situación de la cual respecto de ***los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio***, solo se pronuncian dos siendo la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Tesorería Municipal, situación por la cual hizo falta el pronunciamiento de veintinueve áreas.
2. En esta tesitura, conviene mencionar que toda la información referente a programas de subsidios, estímulos y apoyos, constituye una obligación de transparencia común, de conformidad con el artículo 92, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que se inserta para mayor referencia:

***“Artículo 92****. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

***XIV.*** *La* ***información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos****, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:*

***a****) Área;*

*b) Denominación del programa;*

***c)*** *Periodo de vigencia;*

***d)*** *Diseño, objetivos y alcances;*

***e****) Metas físicas;*

***f)*** *Población beneficiada estimada;*

***g)*** *Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;*

***h)*** *Requisitos y procedimientos de acceso;*

***i)*** *Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;*

***j)*** *Mecanismos de exigibilidad;*

***k)*** *Mecanismos e informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;*

***l)*** *Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida; dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;*

***m)*** *Formas de participación social;*

***n****) Articulación con otros programas sociales;*

***ñ)*** *Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;*

***o)*** *Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y*

***p****) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas jurídicas colectivas beneficiadas, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.”*

1. Para dar cumplimiento a dicha obligación los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia señalan que los Sujetos Obligados deberán organizar y publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y **que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie.** Se trata de los programas que, de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.
2. Asimismo, se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales –tanto de los sujetos a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes públicos–, los del ejercicio en curso y dos anteriores.
3. Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno de los siguientes:

**a. Programas de transferencia**: implican la entrega directa a una persona física o moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales.

**b. Programas de servicios**: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de vivienda, etcétera.

**c. Programas de infraestructura social**: se implementan para la construcción, remodelación o mantenimiento de infraestructura pública.

**d. Programas de subsidio:** otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

1. En ese sentido se debe de establecer que el **SUJETO** si genera y administra relacionada a los ***los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, situación por la cual debe de conocer las características de los mismos,*** situación por la cual para colmar el derecho de acceso a la información El **SUJETO OBLIGADO** deberá de información sobre este cuales son los ***programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, situación por la cual debe de conocer las características de los mismos, así como sus características.***
2. Ahora bien, de ser el caso que alguna de las Direcciones o áreas que integran al Ayuntamiento de Villa de Allende no tengan información relacionada con ***programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, situación por la cual debe de conocer las características de los mismos, así como sus características,*** bastara con que el **SUJETO OBLIGADO** lo haga del conocimiento del **RECURRENTE** de conformidad con el artículo 19 párrafo segundo de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. En esa línea, por cuanto hace a “***Los resultados de la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos con recursos 2021, 2022 y 2023.”,*** se debe de referir que el Tesorero Municipal en su respuesta anexa el link [*https://www.osfem.gob.mx/informederesultados/*](https://www.osfem.gob.mx/informederesultados/)*,* mediante el cual pretende colmar el derecho de acceso a la información del **RECURRENTE,** situación que no se materializa de acuerdo con lo siguiente.
4. De lo anterior, se debe de establecer que cuando los **SUJETOS OBLIGADOS** pretendan colmar el derecho de acceso a la información de los solicitantes por medio de ligas electrónicas, están deberán de ser en formato abierto, esto se traduce a que los solicitantes no deban de transcribir el link proporcionado.
5. En ese sentido, se establece que la Tesorería Municipal, no brindan¿ mayores elementos para localizar la información, ya que no señaló la secuencia de pasos a seguir para consultar los documentos requeridos, como lo establece el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que señala que cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, **se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles.**
6. De lo anterior se colige que no se pueden tener por válido el link remitido por los argumentos expuestos con anterioridad.
7. De lo anterior, se debe de establecer que el documento que de manera enunciativa más no limitativa puede contener los resultados de las evaluaciones realizadas a los programas programáticos o proyectos de los recursos 2021, 2022 y 2023, es el Programa Anual de Evaluación.
8. En esa línea, de acuerdo con el Bando Municipal el área competente para atender este punto de la solicitud de información es la Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal, quien de acuerdo con el artículo 72 del citado Bando Municipal se encarga de lo siguiente.

***Artículo 72.*** *La Planeación estratégica del desarrollo municipal, será el medio para lograr el progreso económico y social del Municipio, con la participación de los habitantes, órganos auxiliares y organizaciones sociales y privadas, a fin de favorecer el desarrollo integral y sustentable del Municipio.*

***La Dirección de Planeación (UIPPE),******es la instancia responsable de generar, integrar, procesar, emitir, reportar y difundir de manera oficial la información, respecto de los planes y programas de su competencia, así como recopilar, analizar y utilizar la información programática de avance de metas, de estadística básica geográfica o de aquella que provenga de los registros administrativos del Ayuntamiento de Villa de Allende, de sus dependencias, así como de fuentes oficiales, para el seguimiento oportuno del Plan de Desarrollo Municipal, para la formulación de informes diversos, incluido el del ejercicio anual y la que sea requerida por otros usuarios,*** *que sea de interés público en términos de oportunidad, veracidad, simplicidad y transparencia.*

1. De lo anterior, se colige que la Dirección de Planeación, es el área encargada integrar, procesar, emitir, reportar y difundir de manera oficial la información, respecto de los planes y programas de su competencia, así como recopilar, analizar y utilizar la información programática de avance de metas.
2. Ahora bien, sobre el Programa Anual de Evaluación (PAE) es necesario señalar que este consiste en la evaluación a los objetivos y metas del **SUJETO OBLIGADO**, para determinar las eficiencias de sus logros, resultados, impactos y acciones que utilizó que alcanzar dichos objetivos y metas, lo anterior en términos de lo señalado por los artículos 285 fracción I del Código Financiero del Estado de México, que señala:

*Artículo 285.- El Presupuesto de Egresos del Estado es el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto, que aprueba la Legislatura conforme a la iniciativa que presenta el Gobernador, en el cual se establece el ejercicio, control del gasto público y* ***Evaluación****.*

*Al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos que tiene como finalidad determinar la eficacia, el logro de sus objetivos y metas, su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad evaluación del desempeño de los Entes Públicos, de acuerdo con su naturaleza jurídica y según corresponda, con base en los objetivos, parámetros e indicadores de desempeño y programas derivados del Plan de Desarrollo del Estado de México, durante el ejercicio fiscal correspondiente y en apego a lo establecido en la legislación aplicable.*

*El gasto total aprobado en el Presupuesto de Egresos, no podrá exceder al total de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, de tal forma que contribuya a un balance presupuestario sostenible.*

*En el caso de los municipios, el Presupuesto de Egresos, será el que se apruebe por el Ayuntamiento. En la aprobación del presupuesto de egresos de los municipios, los ayuntamientos determinarán la remuneración que corresponda a cada empleo, cargo o comisión.*

*Cuando se trate de la creación de un nuevo empleo cuya remuneración no hubiere sido fijada, deberá determinarse tomando como base la prevista para algún empleo similar. Las remuneraciones estarán sujetas a las modificaciones que, en su caso, sean convenidas conforme a la legislación laboral.*

*Para efectos de este Título, se entiende por:*

***I. Evaluación. Al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos que tiene como finalidad determinar la pertinencia, el logro de sus objetivos y metas, su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.” (Sic)***

1. En ese sentido los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, que le son aplicables a los municipios, establece en su capítulo IV en sus disposiciones décimo segunda a la décimo quinta, el tipo de evaluaciones las cuales consisten:

*“CAPÍTULO IV DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN DÉCIMA SEGUNDA. - Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:*

*1) Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en:*

*a) Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados;*

*b) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión;*

*c) Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición de los resultados de un Programa presupuestario de manera general, identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados.*

*d) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados, atribuible a la ejecución del Programa presupuestario;*

*e) Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales.*

*f) Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de campo, y*

*2) Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.*

*DÉCIMA TERCERA.-* ***Las evaluaciones se llevarán a cabo por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)*** *o el área encargada de llevar a cabo dichas funciones; o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; con cargo al presupuesto del sujeto evaluado responsable del Programa presupuestario a evaluar, previa autorización de la UIPPE en coordinación con la Tesorería.*

*DÉCIMA CUARTA. - La evaluación de los programas y sus resultados formarán parte del SED. Los ASM de la evaluación se articularán invariablemente a la planeación y el proceso presupuestario mediante el Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales correspondiente.*

*DÉCIMA QUINTA. -* ***La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo dichas funciones, en coordinación con la Tesorería, establecerán un PAE en el que se identificarán los Programas presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así como el calendario de ejecución correspondiente****.*

***El PAE, se emitirá a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio fiscal.***

1. En donde se advierte que la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) del **SUJETO OBLIGADO**, es la encargada de elaborar el Programa Anual de Evaluación (PAE), en donde se establecerá los Programas presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así como el calendario de ejecución correspondiente, lo que se robustece con la disposición séptima de los mismos lineamientos que señala:

*“SÉPTIMA. - La UIPPE o el área encargada de llevar a cabo las funciones,* ***dará seguimiento a las evaluaciones practicadas a los sujetos evaluados****,* ***respecto a la gestión y logro de los fines de los Programas presupuestarios****.* ***Dichas evaluaciones podrán realizarse anualmente y sus resultados deberán incluirse en el proceso presupuestario. Los sujetos evaluados deberán considerar los resultados de dicha evaluación, y atender las recomendaciones y medidas derivadas de la misma.” (Sic)***

1. En ese sentido, se establece que el Programa Anual de Evaluación (PAE)debe de entregarse a más tardar ***el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio fiscal***, situación por la cual la información de los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 ya debió haber sido generada por parte del **SUJETO OBLIGADO,** situación por la cual para colmar le derecho de acceso a la información del **RECURRENTE** se deberá de entregar lo referido a las resultados de la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos.
2. Por lo último, por cuanto hace a “***Aviso de privacidad respecto al uso de imágenes en informes de gobierno***”, se debe se establecer que en respuesta si bien es cierto remiten información acerca de un aviso de privacidad, también lo es que no es el que colma el derecho de acceso a la información, ya que dicho aviso de privacidad, tiene relación con las fotografías o datos que son publicados en las páginas de redes sociales y la página web oficial de del Ayuntamiento de Allende, mismo aviso que no tiene relación con los avisos de privacidad de las imágenes insertadas en los informes de gobierno.
3. En ese sentido, se debe de mencionar que se consultaron los informes de gobierno de los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés, dentro de los cuales se encontraron imágenes de menores de edad y de ciudadanos a los que se le identifica por la toma fotografía, situación por la cual el **SUJETO OBLIGADO** debió de haber generado el aviso de privacidad a los particulares, situación por la cual se hace el siguiente analisis.
4. En esa línea, el Capitulo Segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, regula lo relacionado con el aviso de privacidad.
5. En ese sentido, el artículo 29, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, regula lo siguiente.

*Comunicación del Aviso de Privacidad*

***Artículo 29.*** *Los responsables pondrán a disposición de la o el titular en formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o de cualquier otra tecnología, el aviso de privacidad, en las modalidades simplificado e integral.*

1. De lo anterior, se colige que los responsables de los datos personales pondrán a disposición de los titulares el aviso de privacidad.
2. Seguidamente el artículo 30 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, establece lo siguiente en cuanto al aviso de privacidad.

***Del Aviso de Privacidad Integral***

***Artículo 30****. Cuando los datos hayan sido obtenidos personalmente de la o el titular, el aviso de privacidad integral deberá ser facilitado en el momento en el que se recabe el dato de forma clara y fehaciente, a través de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubiere facilitado el aviso con anterioridad, supuesto en el que podrá instrumentarse una señal de aviso para cumplir con el principio de responsabilidad.*

***Cuando los datos se obtengan de manera indirecta, el responsable adoptará los mecanismos necesarios para que la o el titular acceda al aviso de privacidad integral, salvo que exista constancia de que la o el titular ya fue informado del contenido del aviso de privacidad.***

1. De lo anterior, se observa que los responsables delos datos personales ya de manera directa o **indirecta** (que podría ser el caso por la toma de las fotografías), debe de adoptar los mecanismos necesarios para que el titular de los datos personales acceda al aviso de privacidad.
2. Seguidamente, el artículo 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, regula que los avisos de privacidad deben de contener la siguiente información.

*Artículo 31. El aviso de privacidad integral contendrá la información siguiente:*

1. *La denominación del responsable.*

***II. El nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito.***

***III. El nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales.***

***IV. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles.***

***V. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales.***

***VI. Las consecuencias de la negativa a suministrarlos.***

***VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento de la o el titular.***

*VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará:*

*a) Destinatario de los datos.*

*b) Finalidad de la transferencia.*

*c) El fundamento que autoriza la transferencia.*

*d) Los datos personales a transferir.*

*e) Las implicaciones de otorgar, el consentimiento expreso. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se acreditará el otorgamiento.*

*IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la o el titular, pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.*

*X. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección electrónica del sistema para presentar sus solicitudes.*

*XI. La indicación por la cual la o el titular podrá revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, detallando el procedimiento a seguir para tal efecto.*

*XII. Cuando aplique, las opciones y medios que el responsable ofrezca a las o los titulares para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad de datos.*

*XIII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.*

*XIV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad.*

*XV. El domicilio del responsable, y en su caso, cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad.*

*XVI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento.*

*XVII. El procedimiento para que se ejerza el derecho a la portabilidad.*

*XVIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia.*

*XIX. Datos de contacto del Instituto, incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y teléfono del Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir asesoría o presentar denuncias por violaciones a las disposiciones de la Ley.*

1. De lo anterior, se observa que las áreas responsables de dar a conocer los avisos de privacidad deben de cubrir ciertos datos como lo son el nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, el nombre del sistema de datos personales o base de datos al que serán incorporados los datos personales, los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles, el carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales, las consecuencias de la negativa a suministrarlos, las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimientode la o el titular.
2. En ese sentido, es oportuno señalar, que **la imagen** de una persona tiene la característica de **dato personal** que cumple con el extremo de la definición legal, ya que no hay otro dato que identifique con mayor claridad y precisión a una persona que la propia imagen relacionada con su nombre o con cualquier dato que la haga identificable.
3. De lo anterior, es importante mencionar que el derecho a la imagen debe entenderse como parte del derecho a la intimidad, y es importante que la persona **de su consentimiento**, ya que al entregar dicha información, no se sabe el destino de esta, sirve de sustento la Tesis 2a. XXV/2016 (10a.), Registro: 2011892, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente:

***“DERECHO A LA IMAGEN. SU CONCEPTO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.***

*El derecho a la imagen debe entenderse como parte del derecho a la identidad, y como un derecho personalísimo que tiene todo individuo de decidir cómo se muestra a los demás, esto es, la potestad de disponer en el ámbito de su propia autoridad y en forma libre sobre su propia imagen. En ese orden de ideas, el concepto de derecho a la imagen previsto en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, se instauró como una limitante que tiene el autor de una obra fotográfica, en el sentido de que podrá comercializar con ella siempre y cuando la persona que aparezca en ésta otorgue su consentimiento para ello.”*

1. En ese sentido, se concluye que la imagen al ser considerada un dato personal dela cual se necesita el consentimiento para su uso, es que debe de generarse y administrarse los avisos de privacidad de la imágenes de particular y menores de edades utilizada en los informes de gobierno del Ayuntamiento de Villa de Allende, situación por la cual para colmar le derecho de acceso a la información el **SUJETO OBLIGADO** deberá de entregar dichos avisos de privacidad al **RECURRENTE.**
2. Por último, se debe de señalar que el RECURRENTE no señalo un periodo de búsqueda para los siguientes puntos, “Solicito información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, con todas las características que debe contener.”, “Aviso de privacidad respecto al uso de imágenes en informes de gobierno” y “Cuantas demandas penales tienen los servidores públicos del ayuntamiento, nombre del imputado y estado procesal.”, situación por la cual es aplicable el periodo de un año inmediato anterior a la fecha de la solicitud de información, de acuerdo con el siguiente criterio del INAI.

***03/19***

***Periodo de búsqueda de la información.***

*En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.*

1. De lo anterior, se colige que el periodo de búsqueda para dichos puntos de la solicitud de información será del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro.

**QUINTO. De la versión pública.**

1. **Nociones generales.**
2. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitadaeventualmente pudieran obrar datos personales susceptibles de protegerse, y toda vez que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México tiene el deber de velar por la protección de los datos personales aun tratándose de servidores públicos y en su caso generar la versión pública de los documentos por las consideraciones que se estimen pertinentes.
3. La clasificación total o parcial de la información requerida, mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información. Como reiteradamente han dicho, diversos Órganos Jurisdiccionales, ningún derecho es absoluto, aunque cualquier límite o restricción, para ser legítimo, debe reunir con tres requisitos: primero, debe de estar establecida en un ordenamiento legal, antes de su aplicación; debe de corresponder a un fin legítimo y ser estrictamente proporcional con el principio o valor que se pretende preservar. En este caso, la clasificación total o parcial de la información es un supuesto que tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante, la Ley General, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en adelante, la Ley Estatal, establecen, y agotar el procedimiento legalmente establecido, es precisamente lo que permite acreditar el cumplimiento de los otros dos requisitos.
4. El grave problema que enfrentamos en general, los acuerdos de clasificación de la información que emiten los Sujetos Obligados siguen sin observar los requisitos, tanto por la complejidad del procedimiento como por la falta de atención de los operadores jurídicos.

**I. Requisitos previos.**

1. Los artículos 122 y 100 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que los sujetos obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación y que son los titulares de las áreas los encargados de clasificar la información. En consecuencia, son los titulares de las áreas que administran la información los que aprueban su clasificación y no el Comité de Transparencia. Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata (nombre, registro federal de contribuyentes, edad, fotografía, entre otros) que forme parte de algún documento o el documento que se pretende reservar (contrato, licencia, póliza, entre otros), señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).
2. Además, se debe señalar el procedimiento que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente, por el que se realiza dicha clasificación, a saber, cuando se atiende una solicitud de acceso a la información, porque lo determina una autoridad competente o porque se va a generar una versión pública para cumplir con sus obligaciones.
3. El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, según lo disponen los artículos 134 y 108 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados.

**II. Supuestos de clasificación.**

1. Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.
2. Los artículos 143 y 116 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial:

*“****I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública. “*

1. Mientras que los artículos 140 y 113 respectivamente, establecen los supuestos que podrán actualizar la necesidad de reservar información:

*“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

1. Por su parte, los numerales 130 y 105 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe de realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.
2. Como consecuencia de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información.
3. Al respecto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así Como para la Elaboración de Versiones Públicas, por cuanto hace a la clasificación de la información, señalan lo siguiente:

*“****Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la clasificación de documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.*

***Quincuagésimo primero.*** *La leyenda en los documentos clasificados indicará:*

*I. La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en su caso;*

*II. El nombre del área;*

*III. La palabra reservado o confidencial;*

*IV. Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;*

*V. El fundamento legal;*

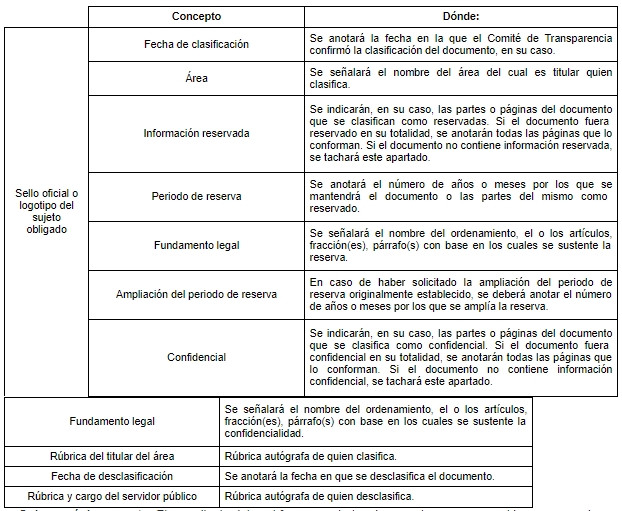
*VI. El periodo de reserva, y*

*VII. La rúbrica del titular del área.*

***Quincuagésimo segundo.*** *Los sujetos obligados elaborarán los formatos a que se refiere este Capítulo en medios impresos o electrónicos, entre otros, debiendo ubicarse la leyenda de clasificación en la esquina superior derecha del documento.*

*En caso de que las condiciones del documento no permitan la inserción completa de la leyenda de clasificación, los sujetos obligados deberán señalar con números o letras las partes testadas para que, en una hoja anexa, se desglose la referida leyenda con las acotaciones realizadas.*

***Quincuagésimo tercero.*** *El formato para señalar la clasificación parcial de un documento, es el siguiente:*

**

1. Una vez hecho lo anterior, se remite la información al Titular de la Unidad de Transparencia, con el acuerdo de clasificación correspondiente, para que sea sometido al conocimiento del Comité de Transparencia.

**III. Consideraciones especiales para la clasificación de la información.**

1. En ese sentido, se debe de mencionar que el **RECURRENTE** requirió acceder al nombre, estado procesal de **las denuncias**, interpuestas en contra de los servidores públicos.
2. Por su parte, como hemos demostrado en párrafos previos, la **Sindicatura Municipal,** se encargará de representar al Ayuntamiento en los procedimientos de carácter **penal,** civil, mercantil, laboral, etc., en los que tenga participación.

**III.I. De la presunción de inocencia.**

1. En primer lugar, resulta aplicable la reserva de la información si no existe una resolución firme, porque de revelarse la información se atenta contra el principio de presunción de inocencia que debe seguirse en la administración de la justicia, conforme a lo que enseguida se razona.
2. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia tiene tres significados garantistas; que en forma breve pueden enunciarse de la siguiente forma:

**Primero**. Como una regla probatoria, que impone la carga de la prueba para quien acusa y, por ende, la absolución en caso de duda.

**Segundo**. Como una regla de tratamiento del acusado, que excluye o restringe al máximo la limitación de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inciden en su libertad personal, con motivo del proceso que se instaura en su contra.

**Tercero**. Como una regla de juicio, que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se aportaron pruebas de cargo suficientes.

1. Así, todo servidor público en su carácter de -presunto infractor- tiene el derecho, *como regla de tratamiento en el proceso*, a que se le trate en carácter de inocente hasta que no se emita una resolución firme.
2. La relación que guarda el principio de presunción de inocencia con el derecho de acceso a la información se da en dos variantes: **(i)** la conservación de información que no vicie las reglas y principios de administración de justicia y **(ii)** conservar la reputación de las personas que aún no se les ha comprobado con plenitud haber realizado alguna infracción.
3. Con más detenimiento, la primera premisa es que de revelarse la información de las personas a quienes se les ha iniciado un procedimiento administrativo y el nombre de aquellos que tienen un procedimiento instaurado y se encuentra pendiente de resolución rompería la regla de tratamiento y de juicio que debe seguirse en la administración de justicia, es decir, su incidencia tiene implicaciones que pudieran afectar la forma en cómo debe tratarse al servidor público acusado, pues no se ha comprobado en su totalidad que éste incurrió en una infracción, razón por la cual es aplicable la reserva de información prevista en el artículo 140, fracciones IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[34]](#footnote-34), con la finalidad de preservar el debido proceso en la aplicación de la administración de justicia a través del resguardo de información que pudiera alterar el principio de presunción de inocencia, de modo tal que el nombre y cargo del servidor público denunciado debe ser protegido, siempre y cuando como se ha mencionado, haya derivado la denuncia en una sanción grave.
4. Luego entonces en el caso, se considera que la publicación de quienes se les ha iniciado una denuncia y el nombre de aquellos que tienen un **procedimiento instaurado y se encuentra pendiente de resolución puede significar una discriminación a su persona hasta en tanto no se determine con firmeza en una resolución si se configuró el delito o no.**
5. El razonamiento que formula este Órgano Garante se construye a partir de la correlación que otros derechos tienen con el acceso a la información en tratándose de información sobre procesos y procedimientos que siguen en forma de juicio, los cuales de la óptica de interdependencia de los derechos humanos no pueden ser desconocidos, en el ámbito de la competencia de este Instituto.
6. Resulta necesario tomar en cuenta el derecho al buen nombre y a la intimidad porque se considera que, hasta en que no exista una resolución firme, la publicación de la información solicitada afectaría la reputación de una persona.
7. A mayor abundamiento, el derecho al buen nombre es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser difamada, esto es, a que por parte de la sociedad se tenga una buena calificación o juicio favorable de su comportamiento mientras no se le pruebe lo contrario; este concepto tiene su basamento en el derecho al honor personal y ambos suponen una valoración de la persona desde la perspectiva de su esfera externa, razón por la cual guardan una íntima relación.
8. Si bien el derecho al buen nombre no es un bien jurídicamente tutelado de manera expresa en el ordenamiento jurídico mexicano si está ligado con la intimidad de una persona, aspecto que sin duda se puede configurase como dato personal sensible ya que a partir de su uso desproporcionado puede destruir la reputación y honorabilidad de una persona.
9. En el fondo, se considera que se puede atentar contra la honra y el buen nombre de una persona mediante la divulgación de información sobre aquellos servidores públicos a quienes se les ha iniciado un procedimiento administrativo, o bien, se encuentran pendientes de resolución porque podrían orientar el juicio que se tiene de una persona por parte de la sociedad, lo que en efecto constituye una lesión injustificada a la posición del hombre en sociedad.
10. En esta condición debe ser resguardada la información con la finalidad de evitar situaciones discriminatorias sobre los servidores públicos a quienes se les inició un procedimiento, o bien, ya iniciado éste no se ha emitido una resolución, por lo que se tiene **la intención de salvaguardar los datos sensibles de las personas a quienes no se les ha corroborado como infractores.**

**III.II. De la información reservada, expedientes en trámite y concluidos.**

1. Así las cosas, es de importante relevancia hacer del conocimiento del **SUJETO OBLIGADO** que la información con la que cuente respecto de expedientes, **penales**, interpuestas en contra de servidores públicos, si **no han causado estado; es decir, que el principio de definitividad no se haya actualizado,** por aún existir instancias para su revisión o impugnación o en su caso que no haya causado estado, dicha información reviste el **carácter de información reservada**, y la cual no podrá dar acceso a la solicitante, pero para ello deberá llevar a cabo el respectivo acuerdo de clasificación de la información como reservada y notificarlo a la **RECURRENTE**; pero si el o los expediente aludidos ya han causado estado, es decir, que ya no acepta recurso o medio de defensa alguno, **es procedente entregar la información al recurrente pero en versión pública** protegiendo todos los datos personales que en éste se encuentren, para lo cual el **SUJETO OBLIGADO** deberá realizar y notificar el Acuerdo de Clasificación de la información relativa a los datos personales a efecto de que pueda emitir la versión pública de lo que se le solicitó.
2. Relativo a ello el **SUJETO OBLIGADO** deberá realizar la clasificación de información, en la que dé seguridad jurídica a la **RECURRENTE** que, por alguna excepción establecida en Ley no es posible acceder temporalmente a la información referida anteriormente, para así no dejar en estado de indefensión y exista certeza jurídica de lo expuesto por el **SUJETO OBLIGADO**.

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XXIV.******Información reservada:*** *La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley;*

*(…)*

***Artículo 122.*** *La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y, en ningún caso, podrán contravenirla.*

*Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.*

***Artículo 125.******La información clasificada como reservada, de acuerdo a lo establecido en esta Ley podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años****, contados a partir de su clasificación, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción, dejaran de existir los motivos de su reserva.*

*Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y tomarán en cuenta las razones que justifican el periodo de reserva establecido.*

*Excepcionalmente los sujetos obligados con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales y por una sola vez, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.*

*Cuando expiren los plazos de clasificación o se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, que a juicio de un Sujeto Obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño (…)*

***Artículo 128.******En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión****.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva,* ***se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño****.*

*Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129. En la aplicación de la prueba de daño, el Sujeto Obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que:***

***I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;***

***II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y***

***III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.***

***Artículo 130.******Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia****, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley General y la presente Ley, aduciendo analogía o mayoría de razón.*

***Artículo 140.******El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:***

*(…)*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. De la interpretación sistemática de los artículos citados, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** debe realizar la debida reserva de la información por seguir en trámite el procedimiento aludido, siguiendo los requisitos expuestos:

**I.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;

**II.** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y

**III.** La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

1. Requisitos que deben estar acompañados de la debida fundamentación y motivación, cobrado aplicación lo que señala la jurisprudencia de la novena época visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis I.4o.A.J/43 (9a.) bajo el número de registro 175082 cuyo rubro y texto esgrime;

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. “El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción”*

1. Debiendo argumentar el **SUJETO OBLIGADO** que la liberación de la información pueda amenazar el interés protegido por la ley; es decir, esgrimir ideas jurídicas en el cual se evidencie la amenaza del daño o alteración al procedimiento que aduce el **SUJETO OBLIGADO**, amparado de razones, y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto en la norma legal invocada como fundamento, específicamente como lo hizo valer en su respuesta, deberá clasificarla por la hipótesis análoga siendo aplicables los numerales de la Ley de la materia, que a la letra esgrimen:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***IX.******Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

*(…)*

***XLV.******Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 122.******La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad,*** *de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*(…)*

***Artículo 132.******La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:***

*(…)*

***III.******Se generen versiones públicas*** *para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

***Artículo 137.******Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia*** *para efectos de atender una solicitud de información,* ***deberán elaborar una versión pública*** *en la que se testen las partes o secciones clasificadas,* ***indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación****.”*

1. De los dispositivos legales citados, se desprende que el derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados estén protegidos, quienes deberán adoptar las medidas de seguridad administrativa, física y técnica necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad todo tratamiento de datos personales que efectúen los Sujetos Obligados deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 14 con relación con el 58 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
2. De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares y de los servidores públicos.
3. Así, los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, emitidos por Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, señalan con claridad cuáles son aquellos datos personales que deben ser clasificados al momento de la elaboración de las versiones públicas.
4. Efectivamente, cuando se clasifica información como confidencial o reservada **es deber someterlo al Comité de Transparencia**, quien debe confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **SUJETO OBLIGADO** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

**III.III. Procedimientos en trámite a la fecha de la presente resolución.**

1. Al respecto, el artículo 140, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (homólogo al artículo 113, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), establece que aquella información que afecte o vulnere la conducción de procedimientos, en tanto no hayan quedado firmes, será reservada.
2. Por lo cual, la causal de reserva prevé que la información podrá clasificarse como reservada en el caso de que obstruya el desarrollo de los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, pretende proteger la información vinculada a dichos procedimientos.
3. Por su parte, en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo siguiente:

*“(…)*

***Vigésimo octavo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:*

***I.*** *La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y*

***II.*** *Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.*

*(…)”*

1. De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de reserva que se analiza se debe acreditar **I)** la existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y **II)** que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.
2. Por tales consideraciones, resulta procedente la reserva, en términos del artículo 140, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de las quejas por responsabilidades administrativas en trámite, en caso de que existieran.
3. Respecto al plazo de reserva, el artículo 125 de la Ley de la materia, establece que la información clasificada como reservada según el artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años; por lo que deberá determinar el periodo de reserva, de manera fundada y motivada.

**III.** **De la existencia de un procedimiento concluido en relación con actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, no se clasificara como reservado.**

1. En ese sentido, debemos traer a estudio lo dispuesto por el numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que se inserta a continuación:

*“****Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:***

***I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

***II.******Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente****, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

***III.*** *Se trate de delitos de lesa humanidad conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

***IV. Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”*

(Énfasis añadido)

1. Así las cosas, la Ley de la materia reconoce a toda la información relacionada con violaciones a derechos humanos y actos de corrupción como información inmune a recibir un tratamiento de clasificación como reservada, en el margen de que, justamente, el hacer del conocimiento a la ciudadanía este tipo de conductas manifestadas por servidores públicos, atiende el objetivo fundamental de la normatividad: el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
2. En ese orden de ideas, cobra relevancia señalar que México ha participado, firmado y ratificado tres convenciones internacionales de combate a la corrupción, a saber: la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA 1997), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE 1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU 2004). Al respecto, la Convención Interamericana contra la Corrupción señala que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; asimismo, considera que el combate a la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.
3. En específico, en el artículo VI de dicha Convención se señalan las siguientes conductas como actos de corrupción: a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los referidos, y e. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de determinados actos. De igual manera, México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que se instituye que los principios de transparencia e integridad se centran en cuatro ámbitos principales:
   1. Creación de un marco eficaz y justo para la apertura y el acceso.
   2. Mejora de la transparencia.
   3. Fomento de una cultura de integridad.
   4. Mecanismos de ejecución, cumplimiento y revisión eficaces.
4. Para la actualización de estos principios, se prevé que los responsables del Estado pueden utilizar todas las opciones normativas y políticas disponibles para seleccionar medidas, directrices o normas que satisfagan las expectativas públicas de transparencia e integridad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/18 “CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS” sostiene que el objetivo de toda política pública para combatir la corrupción debe estar enfocado y ser implementado a la luz de los siguientes principios: el papel central de la víctima, la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia y la interrelación entre los derechos humanos; la no discriminación y la igualdad; la perspectiva de género e interseccionalidad; la participación e inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados. Asimismo, en dicha resolución se destacó que la misma era una primera aproximación integral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la corrupción, por lo que se destacarían algunos ejes fundamentales y se formularían algunas recomendaciones para abordar el fenómeno desde el enfoque de derechos humanos, por lo que, en el apartado de “*Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión*”, resolvió y emitió las siguientes recomendaciones:
   1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la relación estrecha y fundamental existente entre el derecho a la libertad de expresión y la democracia, reconocido como una “piedra angular” de toda sociedad democrática. El artículo 13 de la Convención Americana protege especialmente la búsqueda y difusión de información relativa a la corrupción por su importancia para la consolidación, funcionamiento y preservación de los sistemas democráticos; y
   2. El derecho de acceso la información pública y el principio de la transparencia de la gestión estatal, protegido por el artículo 13 de la Convención, han sido reconocidos como unas de las principales herramientas en la lucha contra la corrupción. En la región, de acuerdo con lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en sus informes anuales, 23 países de las Américas ya cuentan con marcos normativos e instituciones que garantizan el acceso a la información pública. La mayor parte de los países de la región se encuentran admitidos en la iniciativa para el gobierno abierto (*Open Goverment Partnership*) y han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que promueve la apertura del gobierno, la transparencia en todos los niveles estatales y políticas públicas y la participación ciudadana. Sin perjuicio de los avances alcanzados, aún persisten desafíos para la implementación efectiva de las obligaciones de transparencia activa y pasiva que deben observar los gobiernos, lo que podría tener un impacto en el combate contra la corrupción.
5. Con base en lo anterior, y a efecto de abordar este eje fundamental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las siguientes recomendaciones a los Estados:
   1. Fortalecer sus capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a información pública, clave para la lucha contra la corrupción; y fortalecer sus mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas respecto a los gastos e inversiones en infraestructura, la financiación de las campañas electorales, la transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos.
   2. Continuar promulgando leyes que permitan el acceso efectivo a la información pública, en especial para aquellas personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo, de conformidad con los estándares internacionales y propiciar su implementación efectiva y eficiente. Fortalecer los órganos de supervisión con garantías de autonomía e independencia; capacitar a los funcionarios y formar a la ciudadanía en aras de erradicar la cultura del secretismo y con la finalidad de otorgar a las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y la lucha contra la corrupción.
   3. Establecer obligaciones de transparencia activa de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular, en relación con:
      1. Los sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos;
      2. Los mecanismos para prevenir conflictos de interés;
      3. La contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura;
      4. Las actividades de lobby;
      5. La identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado; y
      6. El financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos.
   4. Recopilar, producir, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos e información sobre las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y supervisión, el poder judicial, y otros mecanismos estatales de prevención e investigación de la corrupción, así como sus resultados.
   5. Promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción. Esto incluye garantizar la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que investigan y denuncian corrupción, derogar leyes de desacato y difamación criminal y garantizar la proporcionalidad de sanciones civiles, asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; y establecer sistemas de protección de denunciantes de corrupción.
6. De las recomendaciones transcritas, se reconoce que el acceso a la información y la transparencia son las principales herramientas en la lucha contra la corrupción, destacando que, se deben fortalecer los mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas, respecto de los gastos e inversiones en infraestructura, así como el establecimiento de transparencia activa de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular, en relación con: a) los sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de funcionarios públicos, b) los mecanismos para prevenir conflictos de interés, c) la contratación pública y la gestión del presupuesto público y de las inversiones de infraestructura, d) las actividades de lobby, e) la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado; f) el financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos. Por último, resalta la recomendación, en el sentido de recopilar, producir, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos e información sobre las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y supervisión, el poder judicial, y otros mecanismos estatales de prevención e investigación de la corrupción, así como sus resultados, ya que permite resaltar la importancia de rendir cuentas respecto a las investigaciones sobre hechos que presumiblemente constituyen conductas vinculadas con actos de corrupción. Tomando en cuenta lo anterior, y conforme a la definición de servidor público que establece tanto el artículo 108 de nuestra Constitución, como el artículo 212 del Código Penal Federal reformado, se consideran actos de corrupción, la acción u omisión que llevé a cabo una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en las instituciones gubernamentales, así como por particulares con funciones públicas, en la cual, en pleno ejercicio de sus funciones, obtenga un beneficio o una ventaja de cualquier naturaleza para sí o un tercero sobre algún hecho que no sea permisible en las normas vigentes, o bien, incurra en una conducta catalogada por la Ley como acto de corrupción. Dichos actos están tipificados bajo diversas figuras, las cuales se ubican en el Libro Segundo, Titulo Décimo del Código Penal Federal denominado, precisamente**, “*Delitos por hechos de corrupción*”.**
7. Con base en lo anterior, es claro que lo solicitado se encuadra en **actos de corrupción**. En función de lo expuesto, y considerando que las conductas en comento son presuntamente actos de corrupción, es que el derecho de acceso a la información cobra una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través del ejercicio de éste se puede conocer información relacionada con casos en los que se investiga a servidores públicos, entre otros, que presuntamente realizaron actos apartados de la legalidad. Cabe añadir, que el derecho de acceso a la información tiene una dimensión individual y colectiva, donde la segunda, de conformidad con la tesis con rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA”8 , constituye el pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como la condición fundamental para el progreso social e individual. En ese sentido, no sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema participativo, sin las cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y democráticas.
8. En ese sentido, el **SUJETO OBLIGADO** deberá entregar todas aquellas denuncias relacionadas con actos de corrupción que aún no hayan recibido una sentencia se deberá de entregar, **sin testar el nombre del o los servidores públicos presuntamente responsables**, atendiendo lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Claro está que, de ser el caso que los documentos donde consten las denuncias s respectivas contengan datos personales de terceros, tales como el nombre del o los particulares que presentaron la denuncia respectiva, se deberá realizar la versión pública **únicamente** de estos datos, mas no de ninguno que individualice al presunto servidor público responsable.
9. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas.
10. Por otro lado, en caso de existir denuncias concluidas instaurados en contra de los servidores públicos de las dependencias del Sujeto Obligado, **con sentencia absolutoria**, dicha información tiene el carácter de confidencial, y por tanto debe clasificarse el nombre y cargo de los servidores públicos en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
11. En consecuencia de lo anterior, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por **EL RECURRENTE,** por ello con fundamento en el artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información**00002/VIALLEN/IP/2024 que** ha sido materia del presente fallo y se emiten los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **00403/INFOEM/IP/RR/2024** en términos del Considerando **CUARTO y QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Villa de Allende y se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, en versión pública.

1. **Documento donde consten o se adviertan los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, así como sus características; al once de enero de dos mil veinticuatro; de las áreas administrativas faltantes, del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro;**
2. **Documento donde consten o se adviertan las características de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro;**
3. **Documento donde consten o se adviertan las características de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio de la Tesorería Municipal, referidos en informe justificado; del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro;**
4. **Documento donde conste o se advierta la evaluación realizada a los programas programáticos o proyectos con recursos de los ejercicios fiscales dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés;**
5. **Avisos de Privacidad de las imágenes de particulares utilizadas en los informes de gobiernos del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro; y**
6. **Documento en el que conste el nombre y el estado procesal de las denuncias interpuestas en contra de los servidores públicos del Ayuntamiento de Villa de Allende, del once de enero de dos mil veintitrés al once de enero de dos mil veinticuatro.**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del **RECURRENTE.**

Para el caso de que los procedimientos correspondan a denuncias que no hubieran causado estado, deberá emitirse el Acuerdo de Clasificación respectivo en el que se funden y motiven las razones de su reserva; salvo que el acto se relacione con actos de corrupción, delitos de lesa humanidad o posibles violaciones graves a derechos humanos; deberá entregar en versión pública los documentos en donde conste el nombre, motivo y estatus; en términos de los artículos 49, fracciones II y VIII, 140, fracción VIII y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En caso de existir denuncias concluidas instauradas en contra de los servidores públicos de las dependencias del Sujeto Obligado, **en las que se hay dictado sentencia absolutoria**, dicha información tiene el carácter de confidencial, y por tanto debe clasificarse el nombre y cargo de los servidores públicos en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De ser el caso de alguna de las Direcciones o áreas administrativas no tenga información relacionada con los programas de subsidios, estímulos y apoyos, programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, por no haberse, generado, poseído o administrado, así como que no se hubieran interpuesto denuncias en contra de servidores públicos, el Sujeto Obligado deberá manifestar las razones por las que no se cuenta con la información, en términos del artículo 19, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO**. NOTIFÍQUESE la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado **vía SAIMEX**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE** la presente resolución, vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de **EL RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículo 221, Ídem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 224, Ídem. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 224, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 225, Ídem. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 227, Ídem. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 253, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 254, Ídem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 255, Ídem. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 259, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 307, Ídem. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 311, Ídem. [↑](#footnote-ref-15)
16. Artículo 315, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-16)
17. Artículo 316, Ídem. [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 318, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-18)
19. Artículo 321, Ídem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 324, Ídem. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 335, Idem. [↑](#footnote-ref-21)
22. Artículo 344, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibídem. [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 347, Ídem. [↑](#footnote-ref-24)
25. Artículo 348, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-25)
26. Artículo 349, Ídem. [↑](#footnote-ref-26)
27. Artículo 391,Ídem. [↑](#footnote-ref-27)
28. Artículo 394, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-28)
29. Artículo 395, Ídem. [↑](#footnote-ref-29)
30. Artículo 399, Ídem. [↑](#footnote-ref-30)
31. Artículo 400, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-31)
32. Artículo 401, Ídem. [↑](#footnote-ref-32)
33. Artículo 328, Código Penal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-33)
34. **Artículo 140.-** Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada, la clasificada como tal, de manera temporal, mediante acuerdo fundado y motivado, por los sujetos obligados cuando:

    (…)

    **IV.** Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o cause perjuicio a las actividades de fiscalización, verificación, inspección y comprobación del cumplimiento de las Leyes, de prevención del delito, procuración y administración de justicia, de readaptación social y de la recaudación de contribuciones;

    (…)

    **VII.** El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, (…)” [↑](#footnote-ref-34)